

Ve en www.izquierdanacional.org: Hacia la construcción de un frente nacional antiimperialista en lucha por el socialismo, *declaración de Socialismo Latinoamericano* ★ Las raíces indomestizas de Bolivia, *por Andrés Soliz Rada* ★ El kirchnerismo choca con sus propios límites, *por Osvaldo Caello* ★ Hablan de Báez, pero ¿y Macri?, *por Gustavo Cangiano* ★ Algunos datos para comprender la política de “desendeudamiento” del kirchnerismo 2011-2013, *por Gastón Otero* ★ Documentos: El FIP saluda a los 900.000 que votaron por Perón y la Patria Socialista, declaración de la Junta Nacional ★ El reformismo y el ultraizquierdismo ahogaron al gobierno de Salvador Allende, Izquierda Nacional, junio 1973

SL SOCIALISMO LATINOAMERICANO

núm. 30 - año 4 - junio de 2013 - segunda época - \$1,00

IZQUIERDA NACIONAL ~ ARGENTINA

FUERZAS POPULARES Y PARTIDOCRACIA

El actual escenario no constituye simplemente el cierre de un período, sino que a la vez señala la maduración de condiciones para un realineamiento de las fuerzas populares en sentido contrario al posicionamiento de los partidos y los grupos tradicionales del poder. Ante el relato del oficialismo y el de la oposición, la opción es la emancipación nacional y social.

La situación política nacional está caracterizada por una serie de rasgos significativos: las contradicciones que afronta el kirchnerismo al alcanzar su programa límites de clase que no está en condiciones de superar; el carácter pronunciadamente cerril de la mayor parte de la oposición alineada en torno al discurso del Grupo Clarín, *La Nación* y otras expresiones de la rosca mediática; el fracaso y las desviaciones en que se han sumergido a las fuerzas que pretendieron transformarse en alternativas al régimen existente: Proyecto Sur y el grupo sindical encabezado por Moyano.

Las contradicciones que aprisionan al grupo gobernante son propias de una pequeña burguesía progresista que se desenvuelve en los límites establecidos por el dominio del capital monopolista, en el marco de un capitalismo semicolonial. De otro modo, no se comprende cómo el depredador régimen minero heredado del menemismo no haya sido al menos reformado; el capital financiero siga, en la mayoría de sus negocios, sin pagar impuestos; el comercio de granos, mecanismo de apropiación de buena parte de la renta diferencial por los pulpos multinacionales, no sea estatizado; los tratados bilaterales de inversión, la dependencia del CIADI, tribunal del Banco Mundial, y la legislación de protección al capital imperialista originada en la dictadura, no hayan sido denunciados o anulados. Se trata de medidas de naturaleza nacional-democrática que, sin embargo, exigen la firme determinación política de impulsar el apoyo militante y la movilización de los cuadros, los activistas y del conjunto del movimiento obrero y popular, llevando los antagonismos de clase a un grado más alto de maduración. El kirchnerismo nunca tuvo en su perspectiva nada semejante y, antes bien, observa con desconfianza las iniciativas que se desenvuelven por fuera del control de la burocracia sindical o del régimen de punteros políticos.

Pero si el gobierno no sólo no quiebra sino que mantiene intactos los mecanismos de reproducción del capital monopolista, la partidocracia que lo enfrenta simplemente convalida esos mecanismos, alineándose incondicionalmente en el terreno que le demarcan los círculos tradicionales del poder. El discurso de defensa de la “libertad de expresión”, de la “justicia independiente”, de los “valores republicanos”, difundido por los grandes grupos periodísticos opositores, amontona en un mismo frente antinacional a radicales y socialdemócratas, a peronistas disidentes y a una derecha vergonzante —el PRO— que se dice de centro y, simultáneamente, hegemoniza a una clase media tradicionalmente tributaria de las ideas y los valores del liberalismo oligárquico. Así, el núcleo duro de los *caceroleros* recita religiosamente a personajes grotescos como Lanata y Elisa Carrió, con la convicción de los idiotas útiles, y se alista inmediatamente en

el mismo bando en el que cuatro décadas atrás una pequeña burguesía aterrorizada y reaccionaria pedía ley y orden a quienes en marzo de 1976 organizarían la más sangrienta contrarrevolución.

Más de lo mismo

Se está en presencia de un cuadro político en el que no aparecen líneas de reagrupamiento popular superadoras del estado de cosas actual y en el que, al mismo tiempo, las expresiones que surgieron con la pretensión de desafiar al orden establecido (Proyecto Sur) o de retomar la trayectoria histórica del peronismo (Moyano y el grupo del MTA) cayeron devoradas por sus propias contradicciones.

La alianza en la ciudad puerto entre Proyecto Sur y la fracción de la Coalición Cívica que responde a Carrió, organizada en torno al eje ético constituido con base en las denuncias de la corrupción gubernamental, establece un vínculo de hierro entre la corriente que encabeza Solanas y el resto de la partidocracia tradicional. Carrió es la típica exponente de una clase media que clama al cielo contra la estatización del régimen de las AFJP, la nacionalización parcial de YPF, los mecanismos de control de cambios, y a la que se le eriza la piel de sólo escuchar los nombres de Chávez, Evo Morales o Correa. La alianza anticorrupción se hace en el terreno en el que Carrió es dominante, y sólo un crudo oportunismo electoral puede explicar el barquinazo hacia la derecha de Solanas, cada vez más dependiente de la aprobación del Grupo Clarín o de *La Nación*. En el momento de su irrupción a la vida política, Proyecto Sur tenía dos caminos posibles: convertirse en una variante del centro izquierda progresista u orientarse en un sentido nacional, democrático y antiimperialista. Solanas eli-

gió el primero de esos caminos y, al igual que en los comienzos de los noventa, cuando se asoció con *el Chacho* Álvarez y rompió el Frente del Sur, ahora puso en vía muerta a su corriente, ligándose a Carrió.

El derrotero de Moyano es sintomático. Rompió con el kirchnerismo, afirmándose en legítimas demandas obreras y rechazando el relato épico que pretendía presentar al oficialismo como la continuidad, y a la vez la superación del peronismo. Sin embargo, apenas irrumpió en el mundo político-partidario reveló que su proyecto no era un retorno a los orígenes populares y nacionalistas del movimiento del 45, sino un retroceso a los noventa, de la mano de figuras emblemáticas de la degradación y traiciones de esos años. Sus socios actuales son, en este sentido, inconfundibles: De la Sota y De Narváez, expresiones de un seudoperonismo antiobrero y antinacional; Venegas y Barrionuevo, típicos exponentes de la corrupción en que se ha hundido lo peor de la burocracia sindical, a los que se ha sumado Lavagna, representante del capital monopolista. En definitiva, el prolongado ciclo nacional burgués, que le dio al peronismo el control sobre el movimiento obrero, está agotado y evidencia signos de descomposición.

Pero este vacío político no constituye simplemente el cierre de un período, sino que a la vez señala la maduración de condiciones para un realineamiento de las fuerzas populares en sentido contrario al posicionamiento de los partidos y los grupos tradicionales del poder. La crisis político-institucional de diciembre de 2001 modificó parcialmente el balance del poder, puso en pie de lucha a las masas populares, pero finalmente concluyó en una restauración de los partidos e instituciones del viejo orden semicolonial. Los problemas de fondo que precipitaron el acontecimiento insurgente de aquel entonces siguen pendientes, pero mientras tanto ha surgido una juventud obrera que lucha por conquistar una posición autónoma para su clase, y una pequeña burguesía asalariada que, atraída por la épica nacional-popular, afronta la contradicción entre el relato y los hechos del gobierno. Son por ahora indicios, pero indicios ciertos de que está en proceso de formación una voluntad colectiva de naturaleza nacional, democrática y antiimperialista, en cuya profundización se encierra la posibilidad de abrir un curso de emancipación socialista. ■



ediciones de Socialismo Latinoamericano publicó en junio *Peronismo, camporismo e izquierda nacional* y posteriormente publicará un segundo libro sobre Ramos y la izquierda nacional. Se trata de los primeros títulos de una colección destinada a librar en el terreno de la política, la historiografía y la cultura, una batalla de capital importancia por constituir una visión totalizadora que descifre las claves del pasado y eche luz sobre los problemas candentes del presente. América Latina ha sido a lo largo de su historia tributaria de las ideas que imperaban en las metrópolis y, en consecuencia, presa de una perspec-

tiva deforme y subordinada respecto del sentido de las luchas de sus pueblos y su trágica balcanización. Mientras tanto nuevas cuestiones —problemas identitarios, demandas ecológicas, crisis de las experiencias socialistas...— se han presentado y exigen ser abordadas. Aquel pasado histórico, cuyos asuntos pendientes reaparecen en el presente, y los problemas que definen una nueva época, deben ser dilucidados desde una perspectiva crítica, emancipada de todo tutelaje ideológico de los viejos y nuevos núcleos de intereses que dominan en los círculos editoriales, el periodismo y el terreno cultural. ■

Si considerás que las estructuras político-económicas instauradas por el proceso cívico-militar iniciado en 1976 siguen vigentes gracias a la partidocracia; que es necesario construir un nuevo Frente Nacional Revolucionario, con base en la clase trabajadora y los sectores patrióticos; si rechazás los socialismos importados y creés que cada país construye su propio camino hacia la liberación, sobre la base de sus propias tradiciones históricas,

sumate a SOCIALISMO LATINOAMERICANO
www.izquierdanacional.org
contacto@izquierdanacional.org

Los trabajadores buscan un camino independiente, al margen de la burocracia

Por GASTÓN OTERO

Mucho se ha hablado en estos últimos años del aumento en la participación política por parte de los trabajadores y de la juventud, fundamentalmente.

Un indicio de esto puede verse en las estadísticas de afiliación sindical (las últimas se dieron a conocer en 2006) suministradas por la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Otro aspecto se visualizó al momento de la apertura de paritarias hace ya 10 años, donde los sindicatos obtuvieron un papel protagónico, junto a la política derechista llevada adelante por el kirchnerismo.

Las cúpulas sindicales mantuvieron su poder durante toda esta década a fuerza de requisitos proscriptivos al conjunto de los trabajadores, o acudiendo a métodos “persuasivos” para limitar o promover listas únicas en las elecciones entre otras artimañas.

Un caso paradigmático ha sido el de la UTA, que hizo uso de las famosas patotas sindicales. Y es este gremio en donde nacen los ahora conocidos Metrodelegados del Subte que, enfrentando a la burocracia sindical, consiguen ser reconocidos como legítimos representantes de los trabajadores del Subte. Cada línea de Subte tenía un re-

presentante de distinta procedencia partidaria pero los unía un horizonte de construcción alternativa a las tradicionales.

Este caso abrió un debate acerca de la posibilidad de independizarse de los sindicatos tradicionales, lo que evidenciaba la crisis de representatividad de éstos últimos y su consiguiente baja de afiliados que, en consonancia con el Ministerio, se esfuerzan en mantener escondidas.

¿Y qué se quiere decir, en parte, cuando se habla de la forma de “construir” de la burocracia? Se habla precisamente de la doble función que suele tener la burocracia sindical en donde, circunstancialmente, al producirse desbordes de las bases, actúa como dique de contención de las demandas y utiliza a sus patotas pero también promueve el desgaste psicológico en las bases, para que éstas desistan frente a sus reclamos. Mientras que otra función que cumplen es la de presionar a los empresarios y gobiernos, al promover en algunas ocasiones paros, pero negociando “a la baja” los reclamos de los trabajadores y, posteriormente, “vendiendo” el arreglo como “el mejor posible” dada la coyuntura, la relación de fuerzas o la falta de compromiso, incluso, de los propios trabajadores.

Una década de kirchnerismo ha dejado un saldo negativo en el Movimiento Obrero, al



quedar tres CGT y dos CTA. Esta atomización ha debilitado aún más a todas las centrales y disciplinado a las oficialistas, mientras que “desde abajo” pueden visualizarse a diario tendencias desafiliatorias del conjunto de los trabajadores.

Un claro ejemplo de la debilidad del Movimiento Obrero puede verificarse al suprimirse “sorpresivamente” la discusión por el reparto de ganancias en 2011 a un escenario actual en el que la CGT oficialista intenta obtener una quita en el Impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo del año corriente.

Otro dato significativo es la falta de datos del Ministerio de Trabajo en relación con la tasa de afiliación que, desde 2006, se encargaron de hacer invisible. Cabe destacar que, en ese último informe del Ministerio, si bien la tasa de afiliación por entonces era progre-

siva, se exceptuaban a trabajadores agrícolas y mineros. Esto, en parte, se corresponde con el nivel de trabajo precarizado que arrojan estas actividades.

Este panorama regresivo puede reproducirse, excepto que el conjunto de trabajadores, por medio de sus representantes de base, actúe de forma independiente al promover instancias de deliberación y decisión, rompiendo con las formas verticalistas, prebendísticas y disciplinadoras de las burocracias.

La unidad del Movimiento Obrero no puede ni debe ser una simple proclama, sino que se deben establecer puntos programáticos que se diferencien claramente de la burocracia, trazando un horizonte político organizativo que sea digno de la clase trabajadora. Es importante, para ello, aspirar a que los trabajadores pasen a ser quienes controlen la producción, las ganancias y sean los verdaderos artífices de un cambio en el sistema social que hoy nos oprime y hunde en la dependencia absoluta.

Para esto, avanzar políticamente, implicaría, sin duda alguna, nacionalizar la banca, el comercio exterior y un férreo control en la planificación de los recursos estratégicos del país. Éste deberá ser el puntapié inicial del cambio en el marco de un Frente Nacional Antimperialista ☐

CAUSA AMIA

Un proceso judicial dirigido desde la embajada de Estados Unidos

Por su insólito comportamiento, este funcionario judicial ya habría sido sacado del caso y expulsado de la esfera judicial en otro país no tan presionado por los intereses del sionismo y del Departamento de Estado de EU.



Alberto Nisman.

El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, acaba de emitir un dictamen en el que acusa a Irán de haber instalado estaciones de inteligencia con el fin de organizar actos terroristas en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. Según reveló el dictamen, el magistrado examinó informes, diligencias probatorias de la Argentina, la región, Europa y Estados Unidos y sentencias judiciales de los respectivos tribunales. En consecuencia, el fiscal aseguró que el atentado no resultó un hecho aislado, sino que fue “un engranaje, una parte de un entramado mucho mayor, dominado por una fuerte penetración iraní en la región”.

La parte acusadora también pidió a la Interpol que “extreme los recaudos tendientes a potenciar las medidas para lograr la detención de la totalidad de los acusados que se encuentran con pedido de captura internacional”. Demás está señalar cuál es la posición del fiscal respecto de la comisión de la verdad acordada por los gobiernos de Argentina e Irán para intentar una investigación que no esté contaminada por la presión de intereses políticos, que exigen convalidar una sentencia ya decidida.

Sobre esto último hay que tener en cuenta lo siguiente. En 2011, entre la masa de documentos que Wikileaks hizo públicos figuraron una serie de mensajes intercambiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la embajada de ese país en Buenos Aires, referidos a la investigación del caso AMIA. En febrero de este año *Página 12* (www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-214058-2013-02-17.html) reprodu-

jo en un artículo lo sustancial de esos correos. Un apretado resumen de esta información revela que los distintos funcionarios estadounidenses que mantuvieron relaciones con el fiscal Nisman le indicaron, entre otras cosas, que dejase de lado la “pista siria” y la “conexión local” porque de otro modo podía debilitar el “caso internacional” contra los acusados iraníes. De acuerdo con el juicio de esos funcionarios, Nisman siempre se mostró solícito ante los pedidos y consejos de la embajada y, muchas veces, era él quien iniciaba el contacto. Por ejemplo, en noviembre de 2006 el fiscal informó con tres semanas de anticipación al embajador la decisión del juez de procesar a los funcionarios iraníes; en diciembre de 2007 le entregó a la embajada el borrador del pedido de captura de los iraníes para ser presentado ante la Interpol, pero como el texto no dejó conformes a sus interlocutores, lo modificó siguiendo las indicaciones del representante del FBI. En mayo de 2008 Nisman se comunicó con la embajada para “pedir perdón” por haber avisado que pediría la captura de Menem. Ese ruego lo hizo varias veces. También dio aviso a sus tutores (diciembre 2008 y mayo 2009) de que iniciaría acciones civiles contra los acusados iraníes, y que pediría la captura del colombiano-iraní Samuel El Reda, como integrante de la “conexión local”.

También *Clarín* hizo referencia en una nota publicada el 30 de agosto de 2011 (http://www.clarin.com/politica/AMIA-insolito-pedido-disculpas-EEUU_0_545345548.html) al insólito

comportamiento de un funcionario judicial que en otro país, no tan presionado por los intereses del sionismo y del Departamento de Estado, habría sido sacado del caso y expulsado de la esfera judicial ☐

Página 12

Domingo, 17 de febrero de 2013

Los cables muestran que el gobierno de Estados Unidos impulsó y alentó la investigación de los sospechosos iraníes acusados de haber cometido el atentado que en 1994 mató a 86 personas. Distintos funcionarios estadounidenses mantuvieron numerosos contactos con el fiscal encargado de llevar adelante la investigación, Alberto Nisman. En esos contactos los estadounidenses dejaron en claro que no dudaban de la culpabilidad de los sospechosos iraníes acusados por la fiscalía e insistieron en que Nisman deje de lado la llamada “pista siria” y la llamada “conexión local”, porque seguir esas pistas podría debilitar el “caso internacional” en contra de los acusados iraníes. El fiscal siempre se mostró solícito ante los pedidos y consejos de la embajada, a tal punto que muchas veces era él quien iniciaba el contacto, dicen los cables, para pasar información. En noviembre del 2006 Nisman le adelantó al embajador con tres semanas de anticipación la decisión del juez Canicoba Corral de procesar a los sospechosos iraníes. En diciembre del

2007 Nisman le presentó a la embajada el borrador de un pedido de captura de los iraníes para ser presentado ante la Interpol, pero el borrador de dos carillas no satisfizo y el representante del FBI le hizo varias sugerencias al fiscal para mejorar el texto; dos meses después Nisman volvió a la embajada con un borrador de nueve carillas que, esta vez sí, fue elogiado y ponderado por los estadounidenses. En mayo del 2008 Nisman llamó a la embajada tantas veces para “pedir perdón” por no haber avisado que iba a pedir la captura de Menem, que la embajada tuvo que escribir tres cables distintos dando cuenta de las sucesivas ampliaciones del pedido de disculpas. En diciembre del 2008 Nisman llamó a la embajada para dar “advance notice” de que iniciaría acciones civiles en contra de los sospechosos iraníes. En mayo del 2009 Nisman avisó a la embajada un día antes que pediría la captura del colombiano-libanés Samuel Salman El Reda como miembro de la “conexión local” del atentado.

FERROCARRILES

UNA DÉCADA DESPERDICIA DA

Por GUILLERMO HAMLIN

Por medio del decreto de necesidad y urgencia núm. 566, el gobierno dispuso la creación de la empresa “Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima”; ésta se encargará de la operación y explotación comercial de la red de cargas del ex Ferrocarril Belgrano. Sus accionistas serán íntegramente estatales: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y la Administración General de Puertos. El conductor de la nueva empresa será el camporista Marcelo Bosch, quien ya se venía desempeñando desde el mes de febrero como interventor.

Es evidente que esta medida, que se aplica con la intención de solucionar la ineficacia y falta de planificación de los funcionarios kirchneristas, y que se anuncia como “una herramienta central para la política económica y el desarrollo regional”, demuestra el fracaso de la política ferroviaria del gobierno. Desde 2003 hasta nuestros días, el gobierno realizó numerosos anuncios de inversiones y mejoras que nunca se concretaron, lo que ha llevado a agravar el déficit operativo de la empresa, la que no ha sido capaz de atender la demanda de fletes alternativos al camión, necesarios para las economías regionales.

Esta medida demuestra también el fracaso de la política de privatizaciones ferroviarias comenzada durante el gobierno de Menem. El gobierno anuncia, a través del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que el gobierno “reestatizaría otras empresas ferroviarias de pasajeros” si no se cumplen con los objetivos de mejoramiento del servicio. En principio, podemos coincidir con la política del traspaso de las empresas ferroviarias al ámbito estatal, con beneficio de inventario, pero la objeción que podemos hacer es a la forma jurídica elegida.

El decreto 752/2008 explicita cuáles son las facultades que tienen las dos empresas públicas que creó el Congreso a pedido de Néstor Kirchner: la ADIFSE y la SOFSE, precisamente las accionistas, junto con la Administración General de Puertos, de la flamante empresa estatal ferroviaria. Ambas empresas, según dicho decreto, están exentas de respetar las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos, es decir, pueden disponer de los fondos y bienes públicos sin que medie la aprobación del Congreso. El formato de Sociedad del Estado las habilita para contratar en forma directa como las empresas privadas. Debido a este formato, la Auditoría General de la Nación puede auditar una vez que los hechos ya ocurrieron.

Esta forma jurídica es la que ha permitido la operación del “triángulo de la corrupción ferroviaria” denunciada por el MONAFE: funcionarios gubernamentales, cúpulas sindicales y empresas concesionarias. Nada pareciera indicar que habrá algún cambio en el *modus operandi*, tan sólo cambio de nombres, cambiar algo para que nada cambie.

Siguen los anuncios

En el número 184 de marzo de 2013 de la revista *Rieles*, el gobierno, a través de la ministra de Industria, Débora Giorgi, anunció que la empresa Laminados Industriales estará en condiciones de fabricar rieles ferroviarios para finales de 2014. “Es una instrucción de la Presidenta que se fabriquen rieles en Argentina”, aseguró la ministra, quien agregó que al comenzar la empresa Beltrame, de capitales italianos, a fabricar rieles de acero en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, se sustituirán importaciones por 200 millones de dólares.

El gobierno acaba de anunciar que sigue la importación de vagones ferroviarios. En enero de este año se había anun-

ciado la provisión de 409 vagones por parte de la empresa china CSR Qingdao Sifango Co., para ser entregados a partir de abril de 2014. También en forma directa se habían adjudicado a la misma empresa 300 vehículos eléctricos, que comenzarán a ser entregados en el segundo semestre de 2014. Ahora el gobierno abre un proceso licitatorio para la provisión de 206 nuevos coches. La idea del gobierno es la de lograr hacer coincidir el arribo de los vagones provistos por los chinos de CSR con estos últimos, de manera que en los primeros meses de 2015 estén todas las líneas metropolitanas modernizadas, en conveniente sincronía electoral.

En 1975, la Argentina fabricaba tanto rieles como vagones. La población era del orden de los 25 millones de habitantes y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tenía 1 millón de afiliados, prácticamente un obrero metalúrgico cada 25 habitantes. En nuestros días, en los que ya no fabricamos ni rieles ni vagones, con 40 millones de habitantes, la UOM cuenta con 500.000 afiliados, prácticamente poco más de un obrero metalúrgico cada 100 habitantes.

Si desde 2003 el gobierno hubiera acompañado con hechos concretos los épicos anuncios, hoy hubiéramos fabricado ya los vagones que ahora se importarán de apuro, la producción de rieles estaría en marcha, hubiera vuelto a



renacer un nutrido conjunto de empresas locales de proveedores de la industria ferroviaria en recuperación y la UOM hubiera incrementado su afiliación. En lugar de ello, el gobierno sigue avanzando en la consolidación de la dependencia tecnológica de nuestra industria y en la sumisión al orden transnacional. ■

Peligra el orden republicano

Avanzan las “milicias” de la Cámpora portando lista de precios

El pasado domingo 26 de mayo, *La Nación* publicó una nota de Morales Solá que no tiene desperdicio. El escriba de los Mitre y, a la vez, entrevistador estrella de TN, está seriamente preocupado por la intervención de las organizaciones sociales en el régimen de control de precios que anunció el gobierno. Señaló que Cristina Fernández “llamó a la juventud a organizarse. ¿Para qué? ¿Por qué? No lo precisó”. Agudas preguntas. La juventud tiene que trabajar, estudiar, cumplir con sus deberes cívicos y votar a los candidatos de la partidocracia para que éstos se encarguen de los asuntos públicos.

Pero el gobierno está lejos de esta prudente conducta republicana. La nota asegura que “Cristina Kirchner usará a sus jóvenes camporistas para agravar la sensación de miedo que ya existe en algunos sectores sociales”. No podría ser de otro modo, ya que el control de precios quedará “a cargo de las milicias de la Cámpora”. Además, “¿A qué otra acción que no sea la delación podrán recu-



rrir?”. Como la pantalla de la computadora y el papel de la impresión resisten cualquier desafío, Morales Solá, con sólo deslizar sus dedos sobre el teclado, ha transformado a las organizaciones sociales en temibles milicias dispuestas a sembrar el terror entre los pacíficos empresarios y, con la misma habilidad, ha convertido la denuncia de la violación de los acuerdos en una “delación. Naturalmente no podía escapársele

al sagaz articulista que “el régimen venezolano ha copiado del cubano algunas prácticas similares de control y delación civiles”, por lo que el kirchnerismo viene a ser una aberrante prolongación del Castro-comunismo y del aborrecible chavismo.

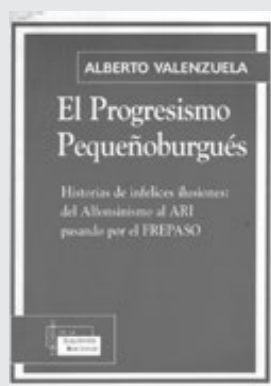
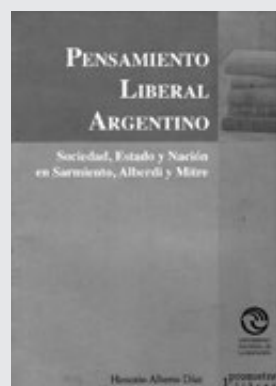
Pero al margen de todas estas consideraciones sobre la amenaza que esta impronta totalitaria significa para la vida republicana, “¿en qué universidad estudiaron los jóvenes cristinistas esos conocimientos como para aplicarlos en el almacén de la esquina?”.

Demasiados interrogantes para el atribulado articulista, que ya no sabe cómo expresarse el cerebro para inventar argumentos que satisfagan las exigencias de los patrones de *La Nación* y del Grupo Clarín. ■



NUESTROS LIBROS

Para mayor información, escribinos a: contacto@izquierdanacional.org o visitá nuestra web: www.izquierdanacional.org



Para Altamira, Perón y Videla compartían objetivo: aplastar a la vanguardia obrera

Por GUSTAVO CANGIANO

En su edición del 21 de mayo pasado, *Perfil* publicó una nota de Jorge Altamira en la que el jefe del Partido Obrero sostuvo que desde el Cordobazo y durante los años que precedieron al golpe de Estado de 1976 ha existido una identidad de fines políticos entre el peronismo y sus enemigos destinada a enfrentar a una “nueva generación combativa y lúcida de la clase obrera”. A esa finalidad habría respondido el levantamiento de la proscripción que pesaba sobre Perón. El error ultraizquierdista de las apreciaciones de Altamira tiene origen en su desconocimiento de la contradicción en torno a la cual se desarrolla la lucha de clases en un país semicolonial entre un bloque político-social de carácter nacional, democrático y antiimperialista y los círculos dominantes integrados por la oligarquía, la gran burguesía y el capital extranjero.

Altamira escribe que, desde el Cordobazo, “el poder político bajo cualquiera de sus configuraciones” tuvo “como su principal rival político” a la nueva generación obrera. ¿Qué quiere decir Altamira cuando escribe “cualquiera de sus configuraciones”? Quiere decir lo que siempre dice la ultraizquierda: tanto el bloque oligárquico-imperialista que había derrocado a Perón en 1955 como el mismo Perón actuaban mancomunadamente contra la clase obrera. Más aún: el bloque oligárquico-imperialista y Perón habrían sido sólo “variantes” burguesas (“configuraciones”) enfrentadas a la clase obrera.

La interpretación de Altamira convierte a Perón en un enemigo abierto de la clase obrera, y en representante político de sus explotadores. Si esto fuera cierto, entonces la tarea fundamental de un partido que pretende representar los intereses de la clase obrera habría sido enfrentar a Perón y al

peronismo, tal como efectivamente lo hizo en su momento toda la pequeña burguesía ultraizquierdista, tanto la fracción terrorista del PRT-ERP como la fracción no terrorista (PO, morenistas, maoístas, etc.).

Tan enemigo de la clase obrera habría sido Perón que, según Altamira, el “levantamiento de su proscripción” habría obedecido a la necesidad de reprimir a los trabajadores. Altamira dice que “la militarización del país y el golpe comenzaron bajo el gobierno constitucional”, tanto “con la creación de la Triple A” como con el Navarrazo y con “la militarización de la cuenca del Paraná”.

Es decir, que Perón no habría regresado al país para retomar el camino de ningún proceso revolucionario interrumpido en 1955, sino para aplicar la más sangrienta política represiva contra la clase obrera. Perón habría sido, para decirlo sintéticamente, un líder político antiobrero y contrarrevolucionario. Se trata, obviamente, de un disparate mayúsculo. Pero como todo disparate mayúsculo, el de Altamira registra elementos de la realidad, sólo que con el objeto de darle al disparate un aire de verosimilitud. Para esto distorsiona el peso de esos elementos en el cuadro general que construye discursivamente. Es cierto que hacia la época del Cordobazo había emergido una nueva generación obrera “combativa y lúcida”. Pero no había emergido de la nada, como parece inferirse del cuadro que pinta Altamira, sino de la maduración de las condiciones de lucha existentes desde el golpe de 1955. La “lucidez” de esa generación obrera la conducía a entrelazar la perspectiva del socialismo con su propia identidad peronista o nacional-popular. Altamira debería explicar en qué consistía tal “lucidez”, si Perón, al que esa clase obrera apoyaba, había sido el ejecutor de la más sangrienta represión antiobrero conocida en la historia argentina, como él sostiene.

La correcta línea demarcatoria se alza, como en una ocasión debió explicárselo el propio Trotsky a los Altamiras de su época, entre el Frente Nacional Antiimperialista de un lado y las “uniones democráticas” oligárquico-imperialistas del otro.

También es parcialmente cierto que la intensidad que iba cobrando la lucha de clases en el país condujo a ciertas fracciones del bloque oligárquico-imperialista a resignarse al retorno del “tirano” al que habían expulsado tres lustros atrás. Pero una cosa era resignarse a ese retorno, o inclusive verlo como un “mal menor”, y otra cosa muy diferente era tomar la iniciativa para que el retorno se produjera. A Perón no lo devolvieron al gobierno quienes lo habían echado en 1955, como creen Altamira y todos los ultraizquierdistas. Lo devolvió la resistencia y la lucha de la clase obrera y los sectores populares.

Sin embargo, ¿no es cierto que la “militarización” del país, es decir, la intensidad de la violencia política estatal, paraestatal y contraestatal recrudesció “bajo el gobierno constitucional”, como llama Altamira al gobierno de la revolución nacional instaurado en 1973?

Sí, es cierto. Pero abordar el análisis de esa “militarización” desde una perspectiva marxista obliga antes que nada a visualizar la significación política que la violencia general, y la violencia terrorista y contraterrorista en particular, adquirían. La interpretación de Altamira nada nos dice al respecto. Parecería que el Navarrazo, los crímenes de la Triple A y la represión de los metalúrgicos de Villa Constitución hubieran tenido el mismo significado político y social que el terrorismo de Estado desatado abiertamente a partir del 24 de marzo de 1976. Pero esto no es así.

La matriz del error ultraizquierdista de Altamira se sitúa en la incapacidad para diferenciar el campo nacional-popular hegemónico por la burguesía nacional, del campo oligárquico-imperialista. Y esta incapacidad deriva de la absoluta incompreensión del desenvolvimiento de la Revolución Permanente en un país semicolonial como Argentina. Para Altamira, el gobierno peronista de 1946-1955 y el de 1973-1976 son meras “configuraciones del poder político” asimilables en su función histórica (reaccionaria y contrarrevolucionaria) a las del período 1955-1973 o 1976 en adelante. Es sorprendente, entre otras cosas, hasta qué punto semejante análisis presuntamente “obrerista” o “clasista” subestima la madurez y la “lucidez” de la clase obrera, que no sólo no habría sido capaz de darse una dirección política propia, sino que habría dado su más fervoroso apoyo... ¡al enemigo de clase!

Digámoslo directamente, a riesgo de escandalizar a Altamira. La “militarización” surgida del seno del gobierno peronista entre 1973-1976 tuvo dos objetivos primordiales: uno fue abortar la posibilidad cierta de que el proceso político evolucionara “hacia la izquierda”, trascendiendo las fronteras del “capitalismo autocentrado”, que era el programa histórico del peronismo. El otro fue defenderse de una restauración gorila. La “militarización” llevada adelante por la dictadura del 24 de marzo, en cambio, no tuvo como propósito principal aplastar una “salida de izquierda”, la cual ya había sido aplastada, sino abortar la perspectiva de “capitalismo autocentrado” del peronismo histórico (el cual, por otra parte, era a esa altura inviable). Dicho de otra manera: la Triple A o el Navarrazo fueron el puño represivo de la conducción nacional-burguesa del Frente Antiimperialista dirigido principalmente (pero no solamente) contra el peligro de un desborde de sus bases plebeyas, mientras que los Grupos de Tareas fueron el “terror blanco” del régimen semicolonial dirigido tanto contra el movimiento obrero y su vanguardia, como contra la perspectiva nacional-burguesa de un capitalismo con cierto grado de autonomía respecto del sistema imperialista mundializado.

El error de Altamira, en suma, consiste en trazar una línea demarcatoria equivocada que coloca de un lado a una abstracta clase obrera y del otro a las “configuraciones políticas” peronista (o hegemónica por el peronismo) y anti-peronista. La correcta línea demarcatoria se alza, como en una ocasión debió explicárselo el propio Trotsky a los Altamiras de su época, entre el Frente Nacional Antiimperialista de un lado y las “uniones democráticas” oligárquico-imperialistas del otro. La clase obrera y su vanguardia más “lúcida” no se colocan al margen de esta divisoria, lo cual implicaría aislarse y colocarse al margen de la historia, sino que son parte constitutiva del Frente Nacional Antiimperialista. El partido de los socialistas revolucionarios debe ayudar a que la clase obrera asuma la conducción de ese Frente. ■

Obama, los drones y el terrorismo imperial

En su reciente discurso sobre la seguridad nacional, el presidente Barack Obama proclamó el derecho de su país a practicar asesinatos selectivos utilizando aviones no tripulados, allí donde se encuentren los blancos que sean considerados como un peligro para Estados Unidos. Un día antes, el fiscal general de ese país señaló que desde 2011 habían sido eliminados mediante ese procedimiento cuatro ciudadanos estadounidenses en Yemen y Pakistán, de los cuales tres hay que computarlos como “daños colaterales”, ya que no figuraban en la lista de ejecuciones. Nada dijo de los 2.560 asesinatos de extranjeros practicados bajo esa modalidad por la CIA en Pakistán desde 2004, ni los 55 que corrieron igual suerte en Yemen, según reveló *The New York Times* en noviembre pasado.

Obama justificó los crímenes de su gobierno al afirmar que las acciones de Estados Unidos “son legales”, que los aviones no tripulados “han salvado vidas” y que “el poder aéreo o los misiles convencionales son mucho menos precisos y probables de causar víctimas e indignación social”. Quienes son condenados a muerte por un jerarca de la CIA no han tenido derecho a un juicio legal que probase culpabilidad alguna y, en consecuencia, han carecido de todo derecho a defenderse. Son sencillamente sospechosos y ejecutados en el extranjero sin importar la violación de la soberanía ajena.

Las palabras de Obama no son otra cosa que la reafirmación de la “doctrina Bush”, que proclamó el derecho de Estados Unidos de intervenir contra cualquier país que supusiese una amenaza para su seguridad nacional.

La fase militarista y terrorista de la política exterior del imperialismo estadounidense se combina internamente con ciertos rasgos sintomáticos de fascistización. En marzo de 2012 fue



promulgada una ley por la cual el gobierno tendrá autoridad para encarcelar, interrogar y procesar políticamente a cualquier sospechoso de terrorismo sin derecho alguno a *habeas corpus*, y suspender además, indefinidamente, la posibilidad de un juicio legal. En mayo de este año fue modificada la Ley de Apoyo a la Defensa Civil de Agencias del Orden Público. De ahora en más, el Pentágono podrá intervenir con fuerzas militares para reprimir “disturbios inesperados a gran escala” sin contar con una orden presidencial cuando resulte imposible obtener esa autorización, o de las autoridades federales, si son éstas “incapaces de controlar la situación”.

Los demócratas que rodean al actual jefe de la Casa Blanca, al igual que los halcones que acompañaron a Bush, son la expresión política de una burguesía imperialista y militarista, convencida de su derecho de ordenar el mundo según sus propios intereses. Constituyen el mayor peligro que amenaza el futuro de la humanidad. ■